

Análisis de entorno: ¿Estado 51?



Tiempo de lectura: 11 min.

[Benjamín Tripier](#)

En este análisis quiero evaluar la tensión entre tutela estadounidense, reciclaje chavista y posibilidad de reconstrucción propia con María Corina Machado. El rol de los actores involucrados, la destrucción institucional a la que nos ha llevado el chavismo gobernante, la legitimidad indiscutible de María Corina, y la tremenda vulnerabilidad en la que nos encontramos, sin credibilidad, con una reputación negativa y sin legitimidad para actuar por nuestra cuenta... Porque hoy, la legitimidad que podamos evidenciar, es la que nos aportan los EEUU.

Venezuela entra en la tercera semana de mayo de 2026 con una paradoja que ya no puede ocultarse detrás de consignas ni de titulares complacientes: el país parece moverse, pero su estructura de poder chavista sigue casi intacta. Lo que cambió desde el 3 de enero no fue la naturaleza del sistema, sino su forma de administración.

Salió del centro Nicolás Maduro, se reordenó la cadena de mando, se recompuso la relación con Estados Unidos y se abrió una expectativa de estabilización; pero el núcleo de control político, coercitivo y territorial del chavismo sigue en pie, ahora con menos ideología, más pragmatismo y mayor capacidad para presentarse como parte de una solución que en realidad administra... y no lo hace bien.

Y ese es el dato más importante para leer el momento. La conversación pública muestra apertura, retorno de interlocutores, amnistía, petróleo y normalización; aunque lo que no muestra abiertamente es que esa apertura está siendo dosificada desde arriba, vigilada por el mismo aparato que antes clausuró toda disidencia, y

validada por una potencia extranjera que hoy privilegia orden, energía y control estratégico por encima de una democratización plena e inmediata.

La reubicación internacional de Venezuela confirma ese cambio. Durante años, el chavismo se apoyó en China como gran financista, en Rusia como respaldo militar y en Irán como socio irregular en seguridad, opacidad y supervivencia geopolítica.

Hoy ese triángulo no desapareció, pero perdió centralidad. China quedó reducida sobre todo a la posición de acreedor incómodo de una deuda opaca todavía significativa, con menos margen para convertirla en influencia política efectiva y con menor prioridad sobre el destino del petróleo venezolano.

Rusia, que supo ocupar un lugar privilegiado en el imaginario defensivo del chavismo, especialmente como soporte del primer anillo de seguridad de Maduro y como socio militar preferente, aparece ahora en una posición mucho más transaccional; el silencio posterior al 3E y la falta de protagonismo visible de ese componente ruso (solo nombraron a los cubanos) sugieren que Caracas dejó de ser una pieza por la cual Moscú esté dispuesto a pagar costos mayores.

Irán, por su parte, quedó concentrado en sus propios frentes, y la relación con Venezuela parece haberse reducido a restos de cooperación militar, opacidad logística y articulaciones irregulares que ya no tienen la densidad económica ni política que se insinuó años atrás.

En paralelo, Estados Unidos pasó de enemigo absoluto a árbitro tutelar. Ese giro no ocurrió por reconciliación sino por conveniencia mutua. Washington necesita energía, control regional y una narrativa de éxito; mientras el chavismo necesita oxígeno financiero, reconocimiento operativo y tiempo.

En ese punto se cruzan dos agendas diferentes: una aspira a una transición administrada; la otra a una conservación administrada del poder. Por ahora conviven sin chocar del todo porque ambas ganan algo en el corto plazo.

La dimensión menos visible, y quizás la más decisiva, es que el chavismo no fue derrotado, sino que se reconfiguró. El centro real de poder interno sigue residiendo en la capacidad de coacción, en el control del aparato partidista, en la administración de la renta y en la posibilidad de regular quién entra, quién sale, quién habla y quién calla.

La Ley de Amnistía debe leerse en ese marco, donde su texto ofrece una apertura amplia para delitos políticos, de protesta, opinión, expresión y persecución selectiva, excluyendo formalmente crímenes graves, corrupción con enriquecimiento, narcotráfico mayor y violaciones severas de derechos humanos.

Sin embargo, políticamente su valor no depende solo de lo que dice, sino de quién la ejecuta, cómo la dosifica y bajo qué lógica. En manos del mismo aparato que convirtió la cárcel en instrumento de negociación, la amnistía puede ser al mismo tiempo alivio real y mecanismo de disciplinamiento.

Ese doble carácter explica por qué la situación política sigue siendo frágil a pesar de las señales positivas. Delcy Rodríguez emerge como figura de interfaz, aceptable para Washington y funcional hacia adentro, pero no como dueña autónoma del proceso. El esquema de poder descrito en los documentos de trabajo presentados en columnas anteriores sigue apuntando a un doble mando en el que Cabello preserva el control del nervio político y coercitivo, mientras Delcy administra el vínculo externo, la gestión económica y la narrativa de estabilización.

Esa combinación le permite al chavismo presentarse como garante de orden sin renunciar al agujón del escorpión. Dicho de otro modo: comparte la renta y flexibiliza la escena, pero no entrega todavía el poder de veto sobre la vida pública.

El problema de fondo es que esta normalización parcial convive con un deterioro social persistente, donde el país sigue agotado, desigual y exhausto. Aun cuando algunos indicadores urbanos hayan mejorado por remesas, dolarización informal o mayor circulación comercial, la estructura de vulnerabilidad permanece, y el cansancio social se mezcla con una pérdida gradual del miedo, haciendo que ese cambio anímico sea relevante.

Las sociedades no siempre se rebelan cuando están peor, sino cuando perciben que el miedo ya no garantiza supervivencia y que la inmovilidad dejó de ofrecer protección. Ese umbral parece haberse movido en Venezuela, y por eso el margen para una reapertura controlada puede, en cualquier momento, transformarse en presión desde abajo.

En economía también hay movimiento, pero conviene no sobredimensionarlo. La reforma petrolera abrió más espacio a capital privado y mixto, permitió más flexibilidad operativa y dio señales favorables a socios externos, todo ello bajo la preservación formal del control estatal.

A partir de una producción de 861 mil barriles por día registrada a inicios de febrero, los escenarios de recuperación para 2026 y 2027 convergen en un rango de 1,0 a 1,3 millones de barriles diarios, con un techo más optimista de 1,4 millones solo si coinciden inversión, seguridad jurídica, estabilidad política y rehabilitación de infraestructura crítica.

El dato importante no es solo cuánto puede subir la producción, sino hacia dónde se concentra la colocación de ese crudo. El patrón emergente confirma un destino preferencial hacia Estados Unidos y sus circuitos autorizados, lo que refuerza la nueva inserción geopolítica del país y reduce la autonomía que antes se proyectaba como soberanía petrolera.

Aun así, la economía profunda del poder no cambió. Las rutas opacas, los mercados paralelos, el contrabando, la logística irregular y los corredores criminales no desaparecen porque mejore el flujo petrolero formal. El Tesoro de Estados Unidos solo puede ordenar parte de los ingresos, supervisar licencias o administrar márgenes de cumplimiento; pero eso no equivale a desmontar las estructuras que durante años hicieron compatible al Estado con el negocio ilícito.

Puede haber bajado la visibilidad de algunos buques fantasmas o de ciertas triangulaciones, pero la arquitectura criminal que vincula territorio, protección armada, rutas internas y negocios ilegales sigue siendo parte del problema de poder, y no un residuo del pasado. El cartel de los Soles y el Tren de Aragua, siguen intactos y operando a sus anchas.

María Corina Machado sigue siendo, en este cuadro, la figura con mayor densidad simbólica, legitimidad social y potencia movilizadora del campo democrático; pero todavía sin acceso equivalente a las palancas reales de decisión. Y allí residen tanto su fortaleza, como su riesgo.

Para Estados Unidos, MCM es útil como fuente de legitimidad democrática y como señal de que la transición no consiste únicamente en reemplazar a Maduro por un chavismo *aggiornado*. Pero al mismo tiempo resulta incómoda si insiste en llevar el proceso a un punto donde el reacomodo pactado se vuelva insuficiente.

Para el chavismo, su sola existencia obliga a administrar mejor la apertura y la represión: no puede ser anulada sin costo, pero tampoco integrada plenamente sin alterar el equilibrio actual.

Con este telón de fondo, los tres escenarios que venimos presentando siguen vigentes, aunque ya no pesan lo mismo:

- El primero, y hoy el más racional para los actores con capacidad de decisión, es una **transición negociada** con desarme progresivo del agujón. En ese escenario, Estados Unidos utiliza petróleo, licencias, reconocimiento y cooperación selectiva como incentivos, mientras el chavismo acepta una apertura real pero controlada, libera más espacio político, amplía la aplicación de la amnistía y pacta una ruta institucional que incluya cronograma, garantías y algún tipo de convivencia competitiva.

La ventaja de este camino es obvia: reduce el riesgo de estallido social, permite recursos para estabilizar al país y hace posible un tránsito menos traumático. Su riesgo es igualmente claro: que el desmontaje del poder coercitivo sea más aparente que real y que la transición termine administrando la continuidad de los mismos factores de mando con otra presentación

- El segundo escenario, que sigue siendo el de probabilidad de ocurrencia más alta, es el **reciclaje autoritario** con mejora económica relativa. En este caso, la apertura petrolera, la amnistía y la reactivación diplomática sirven para recomponer el flujo de caja, limpiar parcialmente la imagen externa y reinstalar una gobernabilidad aceptable para Washington sin una transferencia real de poder.

Sería un chavismo menos épico y más empresarial, menos doctrinario y más tecnocrático, dispuesto a tolerar una oposición visible siempre que no dispute el mando efectivo. Este es, probablemente, el escenario que los medios muestran menos claramente, porque exige admitir que la estabilización puede convivir con la continuidad del control autoritario.

Y sin embargo es el escenario que mejor describe el presente: alivio parcial arriba, mejora limitada en algunas ciudades, expectativas moderadas, y un sistema que aprende a convivir con su propio desgaste sin corregir sus fundamentos

- El tercer escenario, una **ruptura de control y un estallido híbrido**, no es el más probable hoy, pero tampoco puede descartarse. Bastaría una combinación de frustración social, incumplimiento grosero de la apertura prometida, conflictos internos en el chavismo o deterioro súbito de ingresos, para que la transición tutelada pierda equilibrio.

Si la sociedad siente que la apertura fue una simulación, si la amnistía resulta selectiva, si el costo de vida se mantiene sin mejora tangible y si la represión vuelve a escena como respuesta ordinaria, la calle podría dejar de ser respaldo pasivo y convertirse en factor desordenador. En ese punto, el chavismo intentaría reactivar su dispositivo de control, Estados Unidos enfrentaría el dilema entre sostener a su socio táctico o exigir cambios más profundos, y el país entraría en una zona de mayor riesgo, con menos gobernabilidad y más conflicto abierto

A la luz de estos tres escenarios, la narrativa más responsable no es la del entusiasmo ingenuo ni la del pesimismo paralizante, sino la del realismo con horizonte. Venezuela no está mejor porque el poder se haya vuelto bueno, sino porque la correlación externa e interna obligó a ese poder a moverse.

Y no está peor de lo que podría estar porque todavía existe una mayoría social que no renunció a la idea de cambio, una dirigencia democrática con legitimidad, una ventana internacional todavía abierta y un recurso económico que, bien administrado, podría financiar reconstrucción y no solamente supervivencia, como está ocurriendo ahora.

¿Estado 51?

La fórmula lanzada por Trump debe ser leída menos como consigna literal que como prueba de clima político. No se trata de imaginar una anexión formal, sino de medir hasta dónde una parte de la sociedad venezolana, de la dirigencia regional y de los actores económicos, estaría dispuesta a aceptar una tutela estadounidense muy intensa si esta garantiza seguridad, inversión, apertura económica y salida del chavismo como forma de dominación hegemónica.

Sobre la base de lo acumulado en este espacio, la respuesta probable es incómoda pero nítida: habría un apoyo importante de la sociedad -aunque no necesariamente confesado- a cualquier fórmula que combine alivio material, protección efectiva y horizonte de reconstrucción.

Ese apoyo no nacería de una conversión ideológica al americanismo, sino del agotamiento extremo de la sociedad venezolana y de la pérdida de fe en la capacidad autónoma de sus élites para ordenar una salida.

Habría respaldo explícito en sectores económicos, parte de la diáspora, capas urbanas exhaustas y actores sociales que privilegian resultados sobre doctrinas.

Habría neutralidad resignada en una franja amplia del país que ya no discute soberanía en abstracto porque siente que la soberanía real se perdió hace mucho, primero bajo el chavismo y ahora bajo su tutela negociada.

Y habría rechazo en el chavismo ideológico residual, en segmentos nacionalistas, en parte de la izquierda regional y en actores internacionales que verían en ello una validación extrema del unilateralismo estadounidense.

Pero la verdadera cuestión no es si Venezuela aceptaría ser un “Estado 51” retórico, sino por qué una idea así puede circular sin escándalo total. La razón de fondo es que el chavismo destruyó tanto la soberanía concreta del país, que terminó volviendo pensable una tutela externa que, en otra circunstancia histórica, habría sido insoportable para la mayoría. Y esa es su derrota moral más profunda.

Sin embargo, allí mismo aparece una oportunidad; si la sociedad venezolana logra convertir la tutela transitoria en plataforma para reconstruir instituciones, desmontar el aparato criminal, recuperar derechos y abrir una economía competitiva con protección social, entonces la salida no será una anexión ni una dependencia perpetua, sino una reconstrucción nacional asistida, que es lo que la mayoría de los venezolanos esperaban que ocurriera después del 3E, con María Corina a la cabeza... Pero bueno... los gringos lo pensaron distinto, y, ojalá les salga bien, porque en esto nos jugamos el futuro.

El punto decisivo para los próximos meses será, por lo tanto, si Venezuela queda atrapada en una normalización administrada por los mismos factores de poder, o si utilizará esta ventana para fundar algo distinto.

El futuro luminoso no vendrá de una concesión del chavismo ni de un gesto magnánimo de Washington. Vendrá de la capacidad de la sociedad venezolana para convertir petróleo en reconstrucción, amnistía en libertad efectiva, apoyo internacional en instituciones, y cansancio en decisión.

Y cuando eso ocurra, el país dejará de discutir si será un protectorado, un experimento o un “Estado 51”, y volverá a plantearse la única pregunta que de verdad importa: cómo reconstruir una república que vuelva a pertenecerse a sí misma.

Contacto:

Mail: btripierntn@gmail.com

Instagram: [@benjamintripier](#)

Twitter: [@btripier](#)

[ver PDF](#)

[Copied to clipboard](#)